

Procesos de diálogo y percepciones del bienestar en el Valle del Chira en Piura, Perú.

Documento de Trabajo
Nº 276
Marzo 2022

Ignacia Fernández, Rodrigo Yáñez, Tatiana Aguirre, María del Pilar Bernal y Lola Hiernaux¹



¹ Se agradecen los comentarios de Segundo Obando y Melissa Donet (CEDEPAS Norte) y Carlos Córdoba (Rimisp Colombia) a una versión previa del documento

ÍNDICE

Presentación	3
1. El departamento de Piura y el Valle del Chira	5
1.1. Antecedentes socioeconómicos.....	5
1.2. Estructura productiva y fuentes de ingresos	7
1.3. Dinámicas de organización y exclusión de mujeres y jóvenes en el territorio	10
2. Agencia y actores territoriales	13
2.1 Actores y organizaciones con capacidad de acción en el territorio	14
2.2. Conflictos socio territoriales	17
3. Percepción sobre el bienestar y calidad de vida	20
3.1. Centralidad en el acceso a bienes y servicios.....	20
3.2. Hacia una transformación del mercado laboral y el rol de la agricultura	22
3.3. Reconstruir los lazos sociales frente al desplome de la institucionalidad.....	24
3.4. El espacio de la juventud en el territorio	26
4. Origen, características y dinámicas de trabajo de las coaliciones territoriales conformadas en el marco de Territorios en Diálogo	30
5. Conclusiones y aprendizaje para el trabajo territorial	31
Referencias	33

Este documento es el resultado del programa Territorios en Diálogo: Inclusión y Bienestar Rural, coordinado por Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y fue posible gracias al financiamiento del IDRC y Fundación Ford. Se autoriza su reproducción parcial o total y la difusión del documento, sin fines de lucro y sujeta a que se cite la fuente.

PRESENTACIÓN

Este documento describe las dinámicas de dos territorios que conforman el Valle del río Chira en el departamento de Piura, en los que se encuentra trabajando el Programa Territorios en Diálogo en Perú. Estos territorios son: Colán-Vichayal, que debe su denominación al nombre de los dos distritos que lo componen, ambos en la provincia de Paita, una zona agrícola localizada en la parte más baja de la cuenca del río Chira; y Bajo Chira, también eminentemente agrícola, en proceso de reconversión de cultivos, donde conviven grandes agroindustrias y agricultura de subsistencia. Este se ubica en la parte baja del Valle del Chira y comprende seis distritos, cuatro de la provincia de Paita (Arenal, Amotape, La Huaca y Tamarindo) y dos de la provincia de Sullana (Miguel Checa e Ignacio Escudero).

Territorios en Diálogo (TED) se propone contribuir a la generación de dinámicas de desarrollo territorial inclusivo en territorios rurales de América Latina. El Programa trabaja desde octubre de 2019 en siete territorios rurales de cuatro países de América Latina (México, El Salvador, Colombia y Perú) apoyando la conformación de coaliciones locales y procesos de diálogo tendientes a la construcción de agendas de desarrollo territorial que contribuyan a generar cambios en las condiciones de vida de aquellos grupos persistentemente excluidos, particularmente las mujeres y las/los jóvenes.

El programa propone situar a los actores territoriales en el centro del proceso de generación de conocimiento haciendo uso de un paradigma bottom-up y de métodos de investigación-acción que simultáneamente son reflexivos y empoderan a los participantes del programa. Así, pone al centro la práctica y el conocimiento construidos en conjunto con actores sociales, fortaleciéndolos y promoviendo transformaciones sociales (Ander-Egg, 2003; Villasante, 2010). Para ello propone un conjunto de metodologías innovadoras que se nutren de los aprendizajes en materia de desarrollo territorial, los procesos de diálogo en contextos complejos (Lederach, 2008), la medición de indicadores de vida cotidiana (Firschow, 2018; Mac Ginty, 2013) y la sociología visual (García y Spyra, 2008; Liebenberg, 2018), de manera de avanzar al mismo tiempo en una agenda de desarrollo territorial que pueda impactar en las condiciones de vida de los grupos excluidos, así como también, en la comprensión de la forma en cómo ellos perciben dichas condiciones y el impacto que esta agenda produce en ellas.

TED parte del marco de análisis y evidencia sobre dinámicas territoriales rurales desarrollado por Rimisp y sus socios a lo largo de más de 15 años de investigación aplicada, que muestra cómo ciertas configuraciones territoriales – entendidas como la interacción particular entre las estructuras (arreglos sociales y económicos profundamente arraigados), las instituciones (arreglos estables que estructuran la interacción y la organización social) y la agencia humana-, contribuyen a generar dinámicas de crecimiento con inclusión (Fernández y Asensio, 2014; Berdegué, Bebbington y Escobal, 2015; Fernández, Fernández y Soloaga, 2019; Berdegué y Favareto, 2020).

Entre las características que favorecen un desarrollo inclusivo destacan el predominio de estructuras agrarias equitativas, economías más diversificadas y sustentables, con una mayor densidad de vínculos locales en el territorio, y la presencia de pequeñas y medianas empresas que

impactan significativamente la economía local (Berdegué, Bebbington y Escobal, 2015). Adicionalmente, existe evidencia de que los territorios rurales pueden beneficiarse de su relación con un centro urbano (Becker, 2010; 2018; Berdegué et al., 2015; Berdegué y Proctor, 2014) y que la inversión pública tiene el potencial de ser una fuerza transformadora de los territorios rurales, pero no existe una relación siempre directa y positiva entre estas inversiones y cambios que conduzcan a un desarrollo inclusivo, pues los efectos de este tipo de inversiones públicas están mediados por los marcos institucionales (formales e informales) que operan dentro y fuera del territorio. Llegamos acá a un tema clave del enfoque de desarrollo territorial rural: al centro de todo proceso de desarrollo territorial es posible identificar una coalición de actores sociales que realizan acciones convergentes en torno a una dinámica territorial de desarrollo (Tanaka, 2014).

El programa nos ofrece una oportunidad única para contrastar estos hallazgos previos, provenientes de una investigación en territorios con positivos resultados de desarrollo con inclusión, con la evidencia de territorios que no registran dichas trayectorias inclusivas y que enfrentan distintas tensiones en materia de acción colectiva y diálogo social. Nos interesa, especialmente, observar la capacidad que tienen estos procesos territoriales para integrar efectivamente a aquellos actores tradicionalmente excluidos de las dinámicas de diálogo y construcción de acuerdos. Todo ello en un contexto marcado por la pandemia del Covid-19, escenario particularmente complejo para el proceso de conformación de coaliciones y diálogo territorial.

El documento se organiza en cuatro secciones además de esta presentación. La primera entrega un conjunto de antecedentes socioeconómicos e institucionales sobre el Departamento de Piura, en que se ubica el territorio objeto de interés, profundizando en la situación del Valle del río Chira. En esta sección se presta especial atención a la situación de las mujeres y los jóvenes que, como ya se mencionó, corresponden a los grupos sociales de interés preferente del programa TED. La segunda sección se aboca al análisis de la situación de agencia en el territorio, es decir, explora los principales actores con capacidad de incidir sobre las dinámicas territoriales y los conflictos presentes en el territorio. En conjunto, estas dos primeras secciones abordan las tres dimensiones claves para el análisis de dinámicas territoriales rurales antes mencionadas, a saber, la dimensión institucional, la productiva y la agencia humana.

A partir de este marco, las dos secciones siguientes abordan los temas de interés del Programa TED. La tercera sección analiza las percepciones de los actores del territorio acerca del bienestar y la calidad de vida, en línea con la propuesta de investigación-acción del Programa para avanzar hacia una conceptualización de la inclusión que no sólo incorpore una mirada multidimensional, sino que, además, lo haga desde la perspectiva de los habitantes del territorio. La cuarta sección revisa el trabajo de conformación de coaliciones y espacios de diálogo conducido por CEDEPAS Norte en el marco de TED, a la luz de los hallazgos previos sobre capacidad de agencia y percepciones subjetivas del bienestar. El documento finaliza con una sección de conclusiones y síntesis de los aprendizajes, que esperamos pueda aportar al trabajo que se sigue llevando adelante en los territorios.

EL DEPARTAMENTO DE PIURA Y EL VALLE DEL CHIRA

Antecedentes socioeconómicos²

Piura es un departamento mayoritariamente urbano, con un grado de urbanización de 78,6%. Según el Censo de Población y Vivienda (INEI, 2017) la población total del departamento de Piura es de 1.929.970 habitantes, de los cuales el 49,7% son hombres y el 50,3% mujeres (proporción equivalente a la nacional); en términos de pertenencia étnica el 11,26% de la población se reconoce como parte de un pueblo indígena u originario, debajo del promedio nacional de 37,2%.

Por su parte, Colán-Vichayal tiene una población de 20.491 habitantes, con un 87% de población urbana. La población de Bajo Chira alcanza los 50. 881, con un 95% de población urbana. La edad promedio del departamento es 30 años, igual que a nivel país, pero la dependencia juvenil de Piura es de 50,7%³ ; 3,75 puntos por sobre el promedio nacional. La relación de dependencia de la tercera edad es de 18,9.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) de 2018, Piura es el décimo departamento a nivel nacional con mayor población en situación de pobreza o pobreza extrema, representando un 26,74% de su población. Hay un ligero aumento de hombres en situación de pobreza (27,03%) en relación a las mujeres del departamento (26,84%). Sobre ello, el 23,9% de la población tiene al menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). Ahora bien, ambos indicadores de pobreza disminuyeron significativamente entre el 2004 y el 2018.

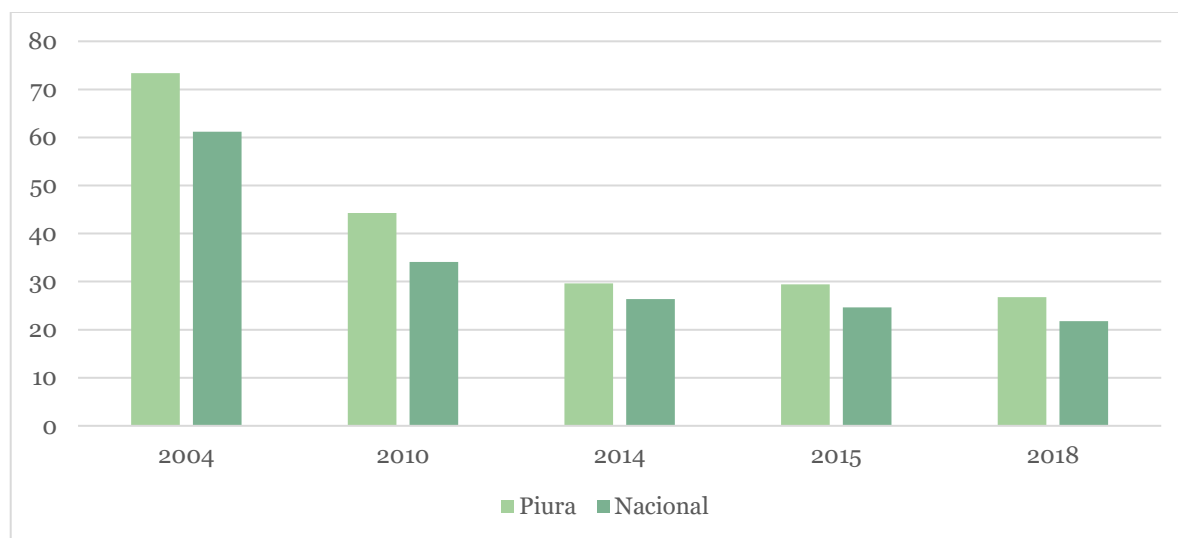
En 2007, la tasa de migración interna de Piura era de 2,5%, poniendo de manifiesto las dinámicas internas del departamento, tendencia posiblemente atraída por la dinámica de crecimiento de las ciudades frente a las zonas de origen. Sin embargo, para el año 2015, el saldo migratorio del departamento era negativo (cerca de 329 mil habitantes, es decir, más del 18% de su población), lo que posiciona como la tercera región que expulsó menos habitantes (OIM, 2015). En la dinámica migratoria existe una ligera tendencia a que sean las mujeres quienes migran en mayor medida.

En el departamento de Piura, la tasa neta de matrícula en el primer nivel de enseñanza alcanzó el 80% en el año 2004 y en 2018 aumentó hasta 87,8%; y en el segundo nivel de enseñanza -de 6 a 12 años- pasó de 68,3% a 81,1% en el mismo período. Ambas tasas son levemente superiores a los promedios nacionales. Sin embargo, menos del 30% de alumnos de cuarto grado de primaria logran los aprendizajes de comprensión lectora esperados para su grado (31,2% en comprensión lectora y 27,5% en matemáticas (SICRECE y ECE, 2018), y aproximadamente 10,5% de la población mayor a 15 años es analfabeta.

² La ENAH, el Censo de Población y Vivienda, y las bases estadísticas utilizadas para este informe cuentan, como máximo nivel de desagregación político-administrativa, con información a escala departamental.

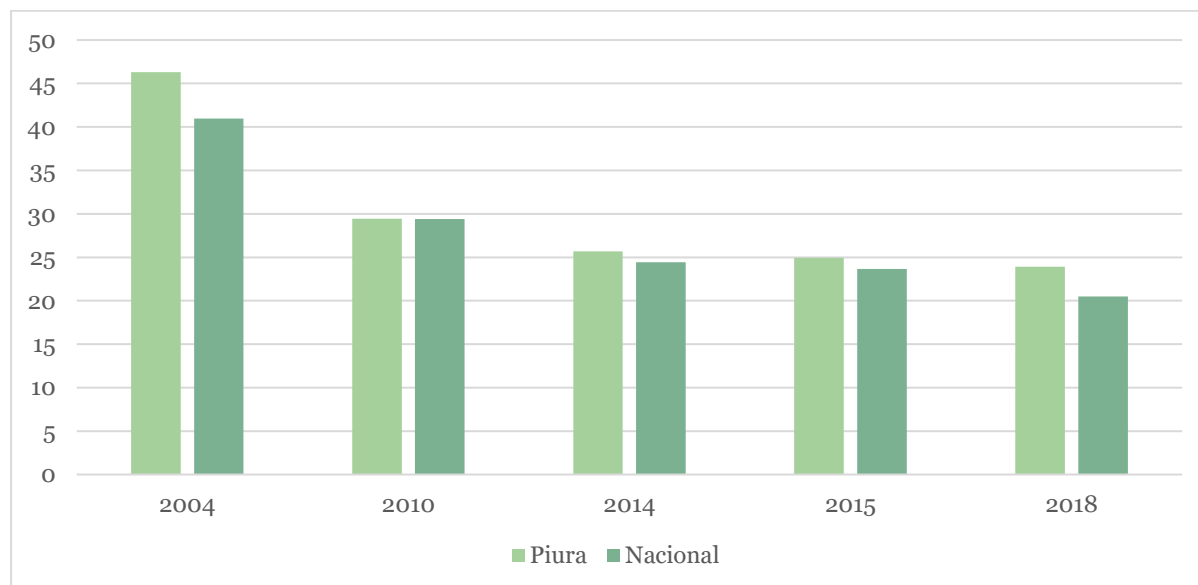
³ La tasa de dependencia es un índice demográfico, que expresa la proporción de personas dependientes sobre la población activa.

Gráfico 1. Porcentaje de población en situación de pobreza o pobreza extrema



Fuente: Elaboración propia en base a ENAHO.

Gráfico 2. Porcentaje de personas con al menos una necesidad básica insatisfecha



Fuente: Elaboración propia en base a ENAHO.

El 74% de las y los jóvenes cuentan con educación secundaria completa, significativamente por encima las personas adultas, cuya tasa está en torno al 42%. Dicho patrón de nuevas generaciones más escolarizadas se repite en las tasas de educación superior, que asciende a 23,8% en jóvenes y se limita a 15,3% en adultos (ENAHO, 2018).

En materia de salud, el número de muertes maternas por cada 10.000 nacimientos es 8,66, más alto que el promedio departamental nacional de 6,47. Por cada 1.000 nacidos(as), en Piura mueren 11 antes de cumplir un año, 3 más que el promedio de departamentos del Perú.

Por cada médico, en Piura hay cerca de 954 pacientes, es decir 700 más personas que atender por cada doctor que en la capital.

El 67% de los habitantes de Piura viven en un hogar con agua proveniente del abastecimiento o pilón públicos y cuentan con algún tipo de servicio de saneamiento (desde sistema de desagüe hasta pozo séptico). Casi 16% de las y los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica.

En este escenario, en el departamento se observa una importante presencia de programas de protección social dirigidos a la población en situación de pobreza. En 2020, el Programa Juntos – Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres- benefició a 87.842 usuarias con un retiro de doble abono para hacer frente a la emergencia sanitaria y en 2021 el mismo programa atiende 63 distritos en el departamento, con un total de 85.271 hogares afiliados. Por su parte, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, que entrega una subvención económica de 250 soles bimestrales a adultos mayores de 65 años o más que carecen de condiciones básicas de subsistencia, atiende a más de 44 mil personas en 65 distritos del departamento de Piura.

Otro programa de relevancia en el departamento es Haku Wiñay –que desarrolla capacidades productivas y emprendimientos rurales en hogares en situación de pobreza extrema– y atiende a 7.416 hogares en Piura. Esto equivale a 42.252.000 soles⁴, para 38 proyectos productivos en 12 distritos. Por su parte, también está presente el Programa Qali Warma, que otorga alimentos a escolares, madres, padres o apoderados de los colegios públicos. En su última etapa (septiembre 2020) atendió a un total de 330.245 escolares.

Estructura productiva y fuentes de ingresos

El Valle del Bajo Chira es un territorio con mucho potencial de desarrollo, pues se ubica dentro del sistema de irrigación Chira – Piura.

En contraste con la situación eminentemente urbana del departamento, Colán-Vichayal y Bajo Chira son territorios cuya principal actividad productiva es la agricultura. El primero cuenta con 3.500 unidades productivas aproximadamente, de 1,75 hectáreas en promedio, mientras que Bajo Chira con alrededor de 3.560 unidades agropecuarias, de 2,87 hectáreas en promedio.

En el territorio se experimenta una transformación productiva en los últimos años, desde una agricultura basada en cultivos tradicionales de baja rentabilidad y técnicas tradicionales, a la producción de banano orgánico (y otros productos) con un mercado más estable y de mayor rentabilidad, orientada a la exportación. Se estima que existen alrededor de 1.300 hectáreas dedicadas al banano. Algunos cambios en los esquemas de producción hacen referencia a una producción basada en la asociatividad, producción orgánica, uso del agua, entre otros. Este cambio de producción ha favorecido el empleo de servicios en torno a la industria de hidrobiológicos

⁴ Equivalentes aproximadamente a \$ 11.210.000 dólares americanos

(Paita) y agroindustria (Sullana y Piura). Al mismo tiempo, ha intensificado la competencia por uso del agua y la tierra entre el sector agroalimentario y la industria de la Caña de azúcar e hidrocarburos, problemas a los que se suma la contaminación del aire y la fragmentación de la tierra como fenómenos crecientes.

Los principales cultivos son frutales –maracuyá y banano, entre otros–, hortalizas, maíz, sorgo escobero, camote y arroz. La agricultura en Colán-Vichayal ha transitado desde una enfocada en el mercado regional y nacional de los cultivos de camote y hortalizas –por medio de técnicas tradicionales–, a una orientada al mercado internacional del banano y maracuyá. En el Bajo Chira, en tanto, la producción está enfocada a los mercados locales, utilizando técnicas tradicionales de producción a excepción del banano. En el Bajo Chira también destaca el cultivo de caña de Azúcar por parte de las empresas Agro Aurora y Caña Brava, las que suman 10.000 hectáreas.

En el marco del proceso de transformación productiva se ha fortalecido un sector de la población que ofrece sus servicios en las ciudades cercanas como Paita, Sullana o Piura, en torno a la industria de productos hidrobiológicos (Paita), o agroindustrial (Sullana, Piura) en cultivos como la uva, hortalizas, mango, etc. Esta actividad es realizada en algunos casos como complemento a otras actividades de base.

El agua disponible para uso humano y agrícola proviene del río Chira. La captación y distribución se realiza por medio de sistemas de riego por bombeo y una red de canales rústicos sin revestir, que no permiten el aprovechamiento óptimo de dicho recurso. El proyecto de irrigación Chira Piura es el medio principal por el que se almacenan las aguas en la represa de Poechos, desde la cual se irrigan las tierras y abastece a la población de las ciudades vecinas. De ambos territorios, solo el distrito de Vichayal no se beneficia del sistema regulado por PECHP. La cuenca Chira-Piura es vulnerable a temporadas de inundaciones y escasez hídrica que ponen en riesgo la disponibilidad de agua de calidad para consumo humano y para el sector agrícola. La subinversión en infraestructura implica una importante dependencia a la represa de Poechos, cuya capacidad se ha visto disminuida por la sedimentación acumulada en más de 45 años de funcionamiento.

En materia de ingresos y empleo de la población, el gasto total bruto mensual per cápita del hogar pasó de 200 soles en 2004 a 550 soles en 2018⁵, lo que lo posiciona como el décimo segundo departamento (de veinticinco) con mayor gasto mensual (ENAHO, 2018). En dicho período, el Gini calculado con base al ingreso per cápita se redujo de 0,48 a 0,39, valores similares al promedio nacional de esta medida de desigualdad. En 2018 el 15,4% de las y los piuranos vivía con ingresos per cápita menores al 50% de la mediana de ingresos.

La tasa de participación laboral departamental alcanza casi 72%, con importantes diferencias entre hombres (82,9%) y mujeres (60,81%). Las tasas de desempleo en el departamento alcanzan el 4,4%, siendo similares entre hombres (4,56%) y mujeres (4,19%).

⁵ Al tipo de cambio de marzo de 2022, 200 soles equivalen a \$53 y 550 soles a \$146 dólares americanos.

Recuadro. Impactos del COVID en la situación socioeconómica de Piura

En Piura, los impactos de la pandemia han sido altos. En 2020 fue el tercer departamento con mayor número de personas contagiadas (17 mil) (Defensoría del Pueblo, 2020) y el segundo departamento con mayor tasa de letalidad del COVID-19, con un 8,5%, aunque con una incidencia del virus entre 2 y 3 casos confirmados por cada 10 000 habitantes (DIRESA, 2020 en CPEP 2020). Los municipios más afectados han sido Piura, Miguel Checa, junto a otros fuera de los territorios TED.

Paita y Sullana, provincias dentro de las cuales se encuentran los distritos de Territorios en Diálogo han conseguido vacunar con dos dosis al 80% de la población objetivo, según cifras de diciembre de 2021 del Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud (Minsa).

Las tendencias de disminución de la pobreza, pobreza extrema, de las necesidades básicas insatisfechas, así como de la brecha de género en estos indicadores se han revertido con la pandemia. La crisis económica y sanitaria del Covid-19 aumentó los índices de pobreza y golpeó más fuertemente a las mujeres y los hogares encabezados por mujeres (ENAHO, 2021).

A enero de 2021, el Producto Interno Bruto del país disminuyó 1%, correspondiendo a una contracción de 0,3% de las actividades primarias y de 1,2% de las actividades no primarias (BCRP, 2021). La actividad agropecuaria tuvo un crecimiento del 1,2% a nivel nacional, en Piura los rendimientos de la producción de mangos (orientados a la exportación) tuvieron un impacto negativo por déficit hídrico en 2020, pero hubo mejores cosechas de limón para el mercado nacional. Según proyecciones (INEI, 2019 en ídem) se esperaba que la recesión afectara a Piura con un decrecimiento entre el 17 y 25%, duplicando la cifra nacional.

El sector agrícola –especialmente banano y arándanos– se ha visto afectado por la contracción de la demanda; cultivos en los que para sostenerse se ha estado priorizando la contratación de jóvenes, bajo el argumento de resguardar a los adultos en casa.

Según información proporcionada por los actores locales, la pandemia ha intensificado algunas dinámicas de conflicto en los territorios, especialmente por el incumplimiento de las restricciones, lo que ha generado tensión con las municipalidades, así como conflictos interpersonales. En Bajo Chira esto se ha asociado principalmente con las personas jóvenes, vinculándolo al aumento de consumo de drogas y alcohol.

Otro conflicto relacionado al contexto de la pandemia es la instalación de antenas de internet. Aunque estas se han planteado con el fin de que quienes estudian puedan realizar las clases virtuales, parte de la población se ha opuesto a dicha instalación por temor a los contagios y otros problemas asociados. Se han generado enfrentamientos –llegando a la agresión– entre quienes sí desean que se instalen las antenas y quienes se oponen, aumentando la percepción de divisionismo en el territorio.

Aproximadamente el 70% de las y los ocupados en Piura se desempeñan en rubros no primarios. Las mujeres se emplean en mayor medida en estos rubros (81,2%) que los hombres (61,43%). En cuanto a los ingresos, los trabajadores agrícolas del departamento tienen una media anual de S/ 6.389 mientras que los trabajadores no agrícolas tienen un ingreso medio de S/ 10.720 .

Las y los jóvenes en Piura presentan tasas de desempleo 5 puntos porcentuales por sobre las y los adultos (7,8% versus 2,7%), y mayores niveles de informalidad laboral sobre el total de ocupados (81% versus 77%). En promedio las y los jóvenes reciben ingresos 9% menores que las y los adultos (ENAHO, 2018) y la proporción de jóvenes auto empleados (patrones, independientes o

empleadores) sobre el total de ocupados en su rango etario es la mitad que la de los adultos (25% versus 53%). Las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan alcanzan 26,8%, sus pares hombres 9,4%, entre ambos en promedio la tasa de desocupación de jóvenes es 17,8% (ENAH0, 2018).

Por su parte, el trabajo infantil alcanza el 2,78%, y la diferencia entre niños y niñas no alcanza el punto porcentual.

Dinámicas de organización y exclusión de mujeres y jóvenes en el territorio

Territorios en Diálogo ha puesto especial atención a la situación de las mujeres y los jóvenes, pues la evidencia indica que estos actores, así como los pueblos originarios y afrodescendientes, tienden a presentar situaciones de doble o triple exclusión por vivir en territorios rurales rezagados y estar, muchas veces, excluidos de las dinámicas de participación en la toma de decisiones y acceso a oportunidades económicas (Rimisp, 2016 y 2020).

El trabajo realizado en el Valle del Chira en Piura confirma estos hallazgos. Tanto en Bajo Chira como en Colán-Vichayal las mujeres enfrentan brechas y obstáculos que las excluyen de participar en distintos ámbitos.

Si bien la brecha de género en pobreza para el departamento de Piura es pequeña, en otras áreas, como la laboral, es notoria. En 2018, la tasa de pobreza en hombres y mujeres fue casi idéntica. Sin embargo, en ese año más del 10% de las mujeres Piuranas eran analfabetas, 4,7 puntos porcentuales por sobre sus pares hombres, y 40% de ellas no participaba en el mercado laboral en comparación al 13% de hombres. La brecha de género en participación laboral no ha tenido una caída sostenida en la última década, sino que ha oscilado entre 22 y 32 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres.

Las mujeres mayores de 14 años sin ingresos propios en Piura son el 37%, comparado con el 13,8% de los hombres. Y el porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas entre los 15 y 19 años es 14,6% (INEI, 2017).

En cuanto a la estructura productiva, aunque en Perú los activos son copropiedad en el matrimonio, en la práctica son los hombres quienes manejan los activos y son vistos como los legítimos para ello. El INEI – CPVCI 2017 estima que, en el valle, sólo un 8,5% de la superficie total de tierras son manejadas o conducidas por mujeres y en las juntas de regantes la presencia de las mujeres como usuarias apenas llega al 9%. En cuanto a las actividades pecuarias, el ganado mayor (vacuno y equino) es manejado por los varones y el ganado menor (aves de corral, cerdos, caprinos, etc) es manejado por las mujeres. Mientras que el ganado mayor es considerado un activo familiar, el ganado menor funciona como reserva frente a eventualidades y atender gastos familiares, especialmente en los periodos de cosechas en que no se perciben ingresos, y para el consumo familiar.

Las múltiples actividades productivas desarrolladas por las mujeres son escasamente valorizadas monetariamente y se consideran como tareas complementarias para el hogar, aunque son vitales

para el sustento familiar. Entre estas destacan las actividades agrícolas que desarrollan en las parcelas familiares, como siembra, deshierbo o cosecha, que a la par de ser un soporte a las actividades que se consideran como principales, significan un trabajo con costo asociado que no está siendo remunerado. Una de las formas de generar ingresos es por medio de la elaboración de productos manuales o artesanías, para la venta ambulante o virtual.

Según la ENAHO de 2018, las mujeres tienen una baja participación (22%) en actividades remuneradas (ya sea en especie o dinero) frente a los hombres en estos territorios (78%). Congruentemente, ellas están sobre representadas (60%) en la población que de quienes no han realizado trabajos por algún pago, en comparación a los hombres (40%). Las ocupaciones que con mayor frecuencia son asumidas por las mujeres son como trabajadoras de servicio y vendedoras de comercios y mercados, seguido de ocupaciones elementales; en menor medida se desempeñan como jefas y empleadas administrativas, y profesionales. Las actividades económicas que realizan las mujeres deben compatibilizarlas con la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado de sus hogares, lo que se traduce en dificultades para su inserción laboral. No se identifica otros activos y recursos productivos que manejen las mujeres, salvo pequeños negocios como bodegas y restaurantes, pero que tienen menor alcance en cuanto a número de personas que involucran y al impacto económico que puedan generar. Por lo mismo no se encuentran organizaciones de mujeres en ámbitos productivos (CEDEPAS, 2020b y 2020c).

Dado que las oportunidades laborales para las mujeres en el territorio son escasas, deben desplazarse hacia ciudades cercanas, donde se emplean en empresas pesqueras o siembra de banano orgánico. Esto se traduce en restricciones para su participación laboral ya que las mujeres asumen la responsabilidad de atender las tareas domésticas y de cuidados, además de la autoridad de sus cónyuges. Lo anterior se traduce en dependencia económica hacia sus parejas, exclusión y pobreza.

En cuanto a la participación social, ni en Perú ni en el territorio se encuentran normas formales que limiten la participación y/o asociatividad de mujeres. Sin embargo, ellas encuentran obstáculos de igual manera.

En materia de participación política, las mujeres tienen una baja representación en cargos de elección popular, aunque en los últimos años algunas han sido electas como alcaldesas y regidoras. Actualmente, en el periodo 2019-2022, de los seis distritos que comprenden el territorio analizado, uno está liderado por una alcaldesa, y de los 30 regidores, 8 son mujeres, lo que representa el 27% del total. De las 8 regidoras existentes, 3 ejercen como primeras regidoras, es decir, se ubican en seguida del alcalde en la ubicación dentro del ejercicio del cargo. El ejercicio de otros cargos políticos (como tenientes gobernadores) muestra parecida proporción de mujeres (30%) respecto a hombres (70%).

Por otra parte, aunque hay presencia de mujeres en espacios formales de participación ciudadana, las decisiones no se dan en concordancia con sus intereses. Como ejemplo, aunque la participación femenina es alta en el espacio anual de presupuesto participativo –en que se tiene voz y voto para la toma de decisiones sobre las prioridades a atender con el presupuesto asignado a la Municipalidad–, las iniciativas priorizadas no las benefician por igual ya que se concentran en

proyectos o intervenciones que, si bien benefician a la mayoría de la población, son sectores tradicionalmente manejados por hombres, como es el caso del sector agropecuario.

Es pertinente recordar que no se encuentran organizaciones de productoras, ni se registran activos y/o recursos productivos bajo el control de las mujeres. Hay otros espacios formales a nivel local en los que las mujeres tienen participación, que se caracterizan por reforzar los roles tradicionales de género, como lo son los Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche o instancias ligadas a salud, educación, entre otros, asociadas a programas sociales y de atención a la niñez y adolescencia.

En cuanto a la participación comunitaria, si bien las mujeres tienen presencia y se ha avanzado en la ocupación de cargos de mayor responsabilidad, no toman los puestos de mayor jerarquía. Ejemplo de ello son las comunidades campesinas que tradicionalmente han estado dirigidas por hombres, las que, aunque consideran a mujeres en las directivas, no se ha dado el caso de una mujer como presidenta. Lo mismo pasa en instancias como los comités de vigilancia y las mesas de concertación, aunque se establecen mecanismos para facilitar la participación de las mujeres.

Existen algunas prácticas, costumbres o creencias que limitan la participación de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida, que no son formales, pero que subsisten. Una de estas prácticas es la asignación estricta de las responsabilidades domésticas y de cuidado a las mujeres, que acarrea una presión y sanción social para cumplir con ellas y genera restricciones para actividades económicas y comunitarias, pues implica no descuidar ni alejarse de sus casas. Otra costumbre refiere a la autoridad de los hombres sobre las mujeres y “la buena reputación” que ellas deben cuidar, encarnada en un carácter sumiso. Mientras que socialmente se espera que los hombres ejerzan control sobre las mujeres, se espera que ellas acaten dichas restricciones, como no permanecer fuera de su casa mucho tiempo ni hasta altas horas de la noche, no salir de casa cuando su pareja está fuera del pueblo, no permanecer en un lugar con mayor presencia masculina, entre otros. La transgresión de estas normas puede acarrear consecuencias graves para las mujeres, desde la discriminación y segregación social, hasta violencia en su contra.

Aunque que las nuevas generaciones están comenzando a contestar estas costumbres, éstas constituyen fuertes obstáculos para la participación y autonomía de las mujeres. A ello se suma el hecho de que la formación de pareja y familia ocurre, en general, a temprana edad, con lo que a las dinámicas recién descritas se suman restricciones a la continuación de estudios y emprendimientos. Congruentemente, no se identifica liderazgos femeninos fuertes que motiven y muevan a más mujeres y definan demandas propias.

Evidencia cualitativa derivada del trabajo del Programa TED en los territorios muestra que también las personas jóvenes enfrentan obstáculos en sus territorios que les excluye de diversos ámbitos de la vida en el territorio. Por un lado, encuentran pocas oportunidades laborales en sus lugares de origen, pues éstas se concentran en centros urbanos como Paita, Sullana o Talara.

Estas consisten en trabajos en fábricas, empresas pesqueras, chacras y labores agrícolas para la cosecha de productos, como el maíz y el plátano; o bien trabajos informales y esporádicos. Las principales empresas que emplean a las personas jóvenes son Caña Brava, en Monte Lima, y Agro Aurora, en La Huaca. Sin embargo, la demanda laboral no es suficiente, situación que se ha agravado con la pandemia y el consecuente cierre de empresas, reducción de personal y exposición

al contagio que significa el desplazamiento a centros urbanos.

Los y las jóvenes encuentran obstáculos adicionales para la organización y participación social en los territorios. Aunque forman organizaciones con fines deportivos y/o culturales, principalmente, en general sus organizaciones no se encuentran bien cimentadas y los espacios existentes no valoran sus aportes e intereses. Pese a esto, también se reúnen para acción de solidaridad y hacer frente a las necesidades y laboral social, ya sea como agrupaciones de voluntarios, por medio de los grupos parroquiales existentes o por grupos impulsados por organizaciones no gubernamentales.

Esto contrasta con el desinterés que perciben por parte de las autoridades de ambos territorios (con la excepción de un distrito), para fomentar y apoyar la participación de las personas jóvenes en las agrupaciones existentes. Esto se debe a que asumen que estas agrupaciones tienen fines políticos y/o serán manipulados por algún líder o candidato político. La falta de espacios de participación se ha agravado con la pandemia debido a que todos los esfuerzos se han concentrado en las clases virtuales.

AGENCIA Y ACTORES TERRITORIALES

El Valle del Chira es un territorio caracterizado por una escasa tradición organizativa. La única excepción corresponde a las comunidades de San Lucas en Colán y Miramar en Vichayal, fundamentalmente la primera de éstas, que cuenta con una larga data de organización y prestación de servicios para sus miembros. Sin embargo, el tejido social sigue siendo más bien débil, sin que se observen liderazgos sólidos para la incidencia y la gestión frente a las autoridades públicas. Ello en un contexto en que, además, las relaciones entre la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y las empresas privadas se caracterizan por la desconfianza y el clientelismo, como lo confirman las dificultades para avanzar en la construcción de confianzas de cara a la conformación de coaliciones territoriales.

Esta trayectoria es consistente con los resultados de la primera medición de la encuesta panel sobre capital social en el territorio, realizada en marzo de 2021 en el marco del Programa Territorios en Diálogo, que muestra que el capital social de eslabón es el menos valorado -respecto del capital social de unión y de puente- y presenta mayor dispersión. El capital social de eslabón está relacionado con el de puente en tanto supone una vinculación entre grupos heterogéneos. No obstante, este tipo de capital social se refiere a las relaciones entre individuos y grupos en distintas posiciones de poder y autoridad, tales como las conexiones entre las comunidades y las autoridades políticas o las relaciones entre las personas y las instituciones financieras (Rimisp, 2021).

Actores y organizaciones con capacidad de acción en el territorio

Los principales actores e instituciones con presencia en ambos territorios son:

Gobiernos distritales, cuyas autoridades fueron elegidas en octubre de 2018 y asumieron en funciones en enero de 2019, junto con las provinciales y departamentales. A raíz de la crisis económica y la pérdida de empleos aparejada a la pandemia del Covid- 19 hay descontento con el actuar de las municipalidades en relación a los protocolos y restricciones implementadas. Las personas se sienten desatendidas, pues perciben que los programas de apoyo no han llegado a los territorios, al tiempo que las municipalidades han paralizado actividades como la atención a público u obras de construcción, que generan puestos de trabajo temporales. Mientras que los municipios de Colán y Vichayal se encuentran muy cuestionados y poseen poca legitimidad, en Bajo Chira existe una mayor cercanía con los gobiernos locales.

Subprefecturas distritales, lideradas por un subprefecto, dirigen a una red de tenientes gobernadores que poseen legitimidad a nivel rural.

Oficinas regionales del MIDIS y la PCM. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, está a cargo de la implementación y ejecución de programas sociales en el territorio, mientras que la PCM (Presidencia de Consejo de Ministros), se considera un potencial aliado para impulsar el diálogo a través de la oficina de gestión de conflictos de Piura y la defensoría del pueblo.

Mesas de Concertación para la lucha contra la pobreza, presentes en cada distrito, pero con diferentes niveles de actividad. Destacan, por su mayor grado de actividad y organización, las mesas de Amotape, El Arenal e Ignacio Escudero. Las mesas responden a una iniciativa gubernamental que opera tanto a escala nacional, como regional, provincial y distrital. Reúnen a los diversos actores relevantes a cada escala para contribuir a i) concertar las políticas sociales en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género; ii) lograr mayor eficiencia en la ejecución de los programas comprendidos en la lucha contra la pobreza; iii) institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social del Estado y iv) maximizar la transparencia e integridad en la gestión de los programas de lucha contra la pobreza ⁶. Las mesas están compuestas por entidades del estado y de la sociedad civil, pero se busca que el liderazgo sea de la sociedad civil porque tiene una función de fiscalización al actuar gubernamental. No tienen convocatoria pública, están reconocidas por el estado, pero son un ente independiente.

Consejos distritales de la juventud, congregan a jóvenes para hacer campañas de ayuda social y levantar temas de interés para la juventud local. Realizan reuniones virtuales y presenciales, las últimas menos frecuentes por pandemia. CEDEPAS está prestando apoyo técnico a las municipalidades para que puedan formar o reactivar estos espacios. Además, existen algunas organizaciones informales de jóvenes que buscan incidir y representar a su grupo en instancias de toma de decisiones, pero no han tenido mucho alcance hasta este momento.

⁶ <https://www.mesadeconcertacion.org.pe/objetivos-y-funciones> Revisado del 24 de enero de 2022

Organizaciones sociales, relacionadas con temáticas de interés de la población, tales como i) Comités de Vaso de Leche que dependen y actúan bajo supervisión de las municipalidades distritales. Su función se centra en la distribución de leche y otros víveres entre grupos vulnerables: niños menores de 5 años, madres gestantes y ancianos; ii) Asociaciones de Padres y Madres de Familia, son una organización independiente que posee una junta directiva y que coordina con las autoridades locales y de la institución educativa a la que pertenecen, para la gestión de proyectos y velar por el buen desempeño de las actividades escolares; iii) Organizaciones de Mujeres y Jóvenes, aunque no son muy activas en el territorio actúan en diversos espacios donde se desarrollan temas de interés comunitario.

Comunidades campesinas, son organizaciones legales, con personalidad jurídica e “integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra” (Artículo 2 de la ley 24.656 general de comunidades campesinas). Actualmente, compiten las lógicas de defensa del territorio frente a las grandes empresas extractivas y aquellas más preocupadas por los posibles beneficios.

Por su parte, actores con presencia en cada uno de los territorios son:

- **Bajo Chira**

Comunidades campesinas (Amotape y Tamarindo), se caracterizan por su dinamismo y representatividad dentro del territorio. Han enfrentado conflictos con las empresas agroindustriales, ya que operan sobre tierras comunales o tienen diferencias por los derechos de propiedad de dicho recurso. No obstante, la posición de la comunidad frente a la agroindustria es ambivalente. Aunque se valora su presencia en el territorio por su contribución a dinamizar la economía local y generar empleo, también se relevan problemas relacionados a las tierras, competencia por el agua y contaminación del aire producto de la fábrica de producción de etanol.

Asociaciones y cooperativas de productores, en distritos como La Huaca, Miguel Checa e Ignacio Escudero, donde ha sido más fuerte el proceso de reconversión de cultivos tradicionales hacia cultivos más rentables. Las más importantes son la Cooperativa Agraria de pequeños productores de banano orgánico de Santa Sofía y Anexos, CAPEBOSAM, en Miguel Checa, y la Cooperativa Agraria de pequeños productores de banano orgánico de Santa Sofía y Anexos – Ignacio Escudero Asociación, Valle del Chira. Desde el año 2011 con la Ley del Acto Cooperativo, los productores encuentran en esta forma jurídica una motivación para organizarse y producir con un mayor poder de negociación ante la gran agricultura y, por ende, mejores ingresos. Los agricultores, en general están ávidos por aprovechar las ventajas de la incursión de la agroindustria, hay expectativa por reconvertir sus cultivos tradicionales hacia cultivos más rentables y con una demanda asegurada.

Empresas agroindustriales Agro Aurora y Caña Brava, dedicadas al cultivo de la caña de azúcar para la producción de biocombustibles. Sus campos de cultivo duplican las áreas cultivadas por los productores locales, con los consecuentes conflictos vinculados al uso de la tierra, el agua y la contaminación del aire.

- **Colán Vichayal**

Comunidades Campesinas de San Lucas en Colán y Miramar en Vichayal⁷. La comunidad de Colán tiene una larga trayectoria de organización, ofrece servicios a sus comuneros y tiene una gobernanza interna que funciona adecuadamente. Mantiene relaciones con la empresa de hidrocarburos Olympic a través de contratos de interés mutuo que permiten a la empresa operar en el territorio y a la comunidad, recibir recursos por dicha operación. En cambio, la comunidad de Miramar en Vichayal enfrenta problemas de organización y quiebres internos relacionados a situaciones de clientelismo que impactan en los procesos de eleccionarios de sus dirigentes. En ambas comunidades, la situación de pobreza, precarización de las condiciones de vida de la población y escasa atención por parte del Estado, incrementa demandas hacia las empresas.

Organizaciones de productores agrícolas. Mientras que en Colán destaca la reconversión de cultivos tradicionales a cultivos más rentables, y una organización de productores cohesionada y articulada en torno a estos cultivos para el mercado; en Vichayal las organizaciones son más débiles, en torno a una agricultura de subsistencia, con productos dirigidos solo al mercado local o regional.

Comisión de Regantes de El Arenal. Organización parte del sistema formal de administración de recursos hídricos para fines agropecuarios. Está conformada por agricultores de los distritos el Arenal y Colán, pero su sede está en el distrito de Colán y la mayoría de los agricultores que agrupa son de este distrito.

Empresas de hidrocarburos Olympic y Graña y Montero. Grandes empresas transnacionales. Por su tamaño, cantidad de ganancias y vinculación a las cadenas globales de valor, generan acuerdos con las instituciones locales y comunidades para la repartición de rentas y otros beneficios. Existen tensiones por desacuerdos o incumplimientos en estas transacciones, así como por las externalidades negativas que provoca la actividad productiva. Graña y Montero ha sido acusada de irregularidades financieras y apropiación de tierras. Olympic tiene acuerdos con la comunidad de Colán que han llevado a enfrentamientos de las posiciones entre los comuneros.

⁷ En la Costa Norte se ubican las comunidades de mayor antigüedad y tradición del Valle: San Lucas de Colán, San Juan de Catacaos, San Francisco de Paita y San Martín de Tours de Sechura entre las cuales se han vivido disputas territoriales por recuperación de tierras, que han desencadenado fragmentación y, al no haber sido resueltas por completo, permanecen latentes entre estas comunidades. En este mismo sentido, la comunidad de Miramar Vichayal fue parte de la comunidad de San Lucas de Colán, de la cual se independizó en 1933 y cuya autonomía sólo fue reconocida de manera oficial por el Estado en la década de los 90. Según relata Huamán (Huamán, 2017) Colán se opuso a la formación de Miramar-Vichayal considerándolo un desmembramiento de la comunidad. Este es un hecho que para la comunidad de Miramar es un hito en su historia y se configuró como una forma para acceder a mayor reconocimiento y beneficios (Quiñones, 2009).

Defensoría del pueblo⁸, ha actuado en el pasado en distintos momentos del conflicto entre las comunidades campesinas y las empresas de hidrocarburos para impulsar acuerdos. Es un actor importante para propiciar acuerdos ya que tienen injerencia con las distintas partes involucradas.

Conflictos socio territoriales

Como se ha señalado, la presencia de empresas agroindustriales y de hidrocarburos en Bajo Chira y Colán-Vichayal, respectivamente, ha dado origen al surgimiento de conflictos socio territoriales de baja y mediana intensidad, que son de interés de Territorios en Diálogo porque influyen directamente sobre las posibilidades de diálogo y construcción de acuerdos territoriales.

En Bajo Chira los conflictos más recurrentes están relacionados con las empresas agroindustriales por la contaminación que provoca la quema de la broza de la caña. Adicional a esto, últimamente se han instalado compuertas en los canales de regadío, lo cual es considerado por la población como un atentado contra el medio ambiente y también contra sus cultivos.

Como quiera que se reduce el agua que abastece los sembríos, su producción tiende a disminuir y se pierde la inversión realizada.

También se observan conflictos en relación al agua, por problemas de saneamiento y desagües que constantemente colapsan. A ello se suma que el agua para consumo no siempre está adecuadamente tratada, pero hay desconocimiento entre las comunidades sobre cómo actuar y dónde interponer un reclamo, lo que se ve agravado porque la administración pública se considera ineficiente. Sobre estas situaciones existen muchas quejas a las cuales las municipalidades no atienden con la debida rapidez, lo que se ha intensificado durante la pandemia.

Existe, además, un debate entre la pequeña y mediana agricultura para hacer esta actividad más sustentable, pero, por otro lado, hay otros productores que abogan por la reconversión e incorporación a las grandes cadenas de valor. Para ambas actividades ha sido clave la cooperación internacional.

En Colán-Vichayal el conflicto más álgido es entre la comunidad y las empresas privadas de hidrocarburos. Aunque éstas ofrecen oportunidades laborales a las personas de la zona, hay reparos por parte de la comunidad con el trato y comunicación que reciben, así como por las condiciones laborales. Además, la población manifiesta que estas empresas atentan contra el medio ambiente y la agricultura, pues contaminan el aire y agua. Este conflicto repercute también al interior de la comunidad de Colán y se da entre los comuneros poseionarios de las tierras donde operan estas empresas, con quienes han firmado un contrato, y el resto de la comunidad.

También existen conflictos al interior de la comunidad en torno al uso de terrenos eriazos de parte de empresas agroindustriales. Esta última relación es más compleja porque se contraponen visiones del uso de la tierra y la identidad dentro de la comunidad y entre la comunidad y las

⁸ Organismo constitucionalmente autónomo el Estado peruano, cuya misión es “defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado”. <https://www.defensoria.gob.pe/quienes-somos/> Revisado el 24 de enero de 2022.

autoridades. Estas tierras eriazas tanto para las autoridades como para la empresa se consideran abandonadas. Utilizando lo anterior como justificación las autoridades subnacionales han vendido tierras eriazas a las empresas, incrementando la conflictividad del territorio, ya que los comuneros han respondido con demandas judiciales para revertir la compra de la tierra.

En el caso de Miramar también existen disputas similares por los sitios eriazos, pero orientadas hacia las obligaciones de pago pendientes de Olympic. Entre ambos actores en el pasado ha existido diálogo mediado por la defensoría en donde ambas partes llegaron a acuerdos.

Las autoridades locales no intervienen en los acuerdos contractuales entre empresas y comunidades. Pero sí el Gobierno regional de Piura, que le ha vendido tierras a empresas, generando como respuesta de parte de los comuneros acciones judiciales concretas. La lejanía entre el sector público y la comunidad ha generado confrontación y descontento de la ciudadanía frente a las autoridades ante una serie de necesidades sociales insatisfechas en materia de empleo, educación, salud, entre otras. Estas se han exacerbado con la pandemia del Covid-19. El descontento con las autoridades también se genera por la falta de apoyo a la agricultura, actividad central actividad de la zona, y el turismo.

Recuadro. Comunidades de San Lucas (Colán) y Miramar (Vichayal) en conflicto con la empresa Olympic de extracción de gas y petróleo para la producción de hidrocarburos y otras empresas extractivas.

La extracción de gas y petróleo en Colán y Vichayal es realizada por la Empresa Olympic, y en este último distrito, también la empresa Graña y Montero. Las principales causas generadoras de conflictos entre estas empresas y las comunidades campesinas son la distribución de beneficios provenientes de la actividad extractiva entre las comunidades, el acuso de incumplimiento de acuerdos por parte de las empresas con las poblaciones locales, daños ambientales y la intromisión de las empresas en las dinámicas comunitarias. Este tipo de relacionamiento entre las empresas y algunos miembros de las comunidades han incentivado prácticas clientelares, y el manejo irregular de recursos económicos comunitarios por parte de directivas de la comunidad, especialmente en Miramar, provocando la desconfianza y fragmentación en las comunidades.

En este sentido, los conflictos se generan principalmente en la relación de las empresas con las comunidades, así como al interior de las comunidades.

El análisis del conflicto reconstruido en diálogo con el equipo de CEDEPAS Norte evidencia la inexistencia de mecanismos institucionalizados para manejar estos conflictos. Los acuerdos alcanzados han dependido de la voluntad de las directivas de las empresas, quienes de manera bilateral se relacionan con los habitantes de estos territorios ante la ausencia del Estado como regulador de esta relación.

Al interior de las comunidades se han generado fuertes antagonismos derivados de posiciones encontradas respecto de su relación con las empresas. Por una parte, está el rol de intermediadoras con las empresas para lograr mejores beneficios de las actividades extractivas realizadas en sus territorios; y por otra, como un espacio de protección del territorio y la propiedad colectiva frente a la presión generada sobre los recursos existentes por parte de las empresas, facilitado por el marco institucional promovido desde el Estado (Quiñones, 2009).

El origen de los conflictos que experimentan estos territorios data de las transformaciones que durante la década de los 90 tuvo el marco normativo peruano frente al reconocimiento, protección y promoción

de comunidades campesinas , al limitar los atributos que tenían las tierras comunales de poblaciones campesinas y nativas, convirtiéndolas en tierras de libre disponibilidad si era decisión de los comuneros a través de normativas que promovían la inversión privada en este tipo de territorios.

Si bien las comunidades de San Lucas de Colán y Miramar Vichayal han atravesado procesos similares, se presentan algunas particularidades que cabe tener en consideración.

En Colán se enfrentan conflictos por la titulación de la tierra y superposición de usos, tanto dentro de las comunidades como ante el Estado peruano, generando una inseguridad jurídica para las comunidades frente a grupos empresariales que buscan acceder a eriazos comunales. Burneo (2012) plantea como hipótesis que la comunidad es vista por algunos de sus miembros como una forma de acceso a la tierra de la que eventualmente pueden desprenderse para acceder a las dinámicas privadas. En este sentido evidencia como a partir del reparto de zonas altas por parte del gobierno comunal de Colán, iniciado en 2009, en el entendido de que la distribución de tierras entre los comuneros ayudaría a blindar el avance de grupos empresariales, se debilitó la propiedad de la comunidad y la capacidad del control territorial por parte del gobierno comunal. Así, emergieron nuevas tensiones internas debido a la divergencia entre las expectativas de lucro personal de algunos de los que accedieron a estas tierras con el interés de arrendar o venderlas a las empresas, provocando un riesgo de desmembrarlas y los propósitos de la contención de las dinámicas empresariales en el territorio por parte otros sectores de la comunidad.

La comunidad de San Lucas ha firmado un contrato con la empresa Olympic desde hace aproximadamente 16 años con una duración de 30 años (CEDEPAS, 2020b) a través del cual otorgan derecho de paso, uso de territorio comunal e instalación de pozos en estas áreas para el funcionamiento de la actividad extractiva. De este acuerdo se reciben dos tipos de contraprestaciones. Una otorgada a los comuneros en cuyas parcelas han sido instalados y operan pozos; otra a la directiva de la comunidad por los pozos que se ubican en tierras eriazas de propiedad comunal. Sin embargo, a pesar de la existencia de este contrato, existen quejas, tensiones y descontento entre los miembros de la comunidad campesina de San Lucas de Colán que argumenta el incumplimiento de compromisos de responsabilidad social por parte de la empresa, el incumplimiento de oferta cupos laborales para la población local y solicitan renegociar el contrato de constitución de derechos y servidumbre de tránsito y locación como se documenta de manera reiterada en el balances anuales de conflictividad del gobierno peruano. Ante esta situación, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) realiza labores de monitoreo de la relación y el diálogo.

Por su parte, en la comunidad Miramar Vichayal el relacionamiento con empresas petroleras y productoras de etanol reconfiguró dinámicas sociales y organizativas de la comunidad, generando diversas tensiones. La presencia de empresas petroleras en este territorio data de 1996, con la entrada de la empresa Inter Oil (anteriormente denominada Mercantile), con la cual se produjeron tensiones en torno a los montos estipulados por los derechos de concesión y servidumbre, por lo que se realizó una renegociación estableciendo nuevos acuerdos. Esta empresa vendió sus operaciones en 2015.

Actualmente en el territorio se encuentran las empresas Graña y Montero, y Olympic. Quiñonez (2009) registra a partir de su trabajo en campo una relación mucho más conflictiva con Olympic, generada por los derechos de uso pagados a la comunidad y la generación de empleo para la población local. En el caso de la empresa Graña y Montero, además del incumplimiento de acuerdos, se han generado tensiones por la ampliación de las actividades sin consulta a las comunidades por parte de esta empresa. Asimismo, se documentan cambios en el funcionamiento de la organización comunal que han provocado divisiones internas relacionadas con el reparto de beneficios otorgados por las empresas y la intermediación que realizan las dirigencias comunales de dichos recursos económicos. CEDEPAS (2020a) aduce que existen denuncias y señalamientos por parte de los comuneros a los directivos comunales por el uso irregular de los recursos pagados por la empresa, lo cual ha generado fracturas en la comunidad, disputas por terrenos

que fueron dejados por familias que han decidido volver ante la expectativa de oportunidades laborales, cuestionamientos a los procesos electorales internos, enriquecimiento personal, falta de legitimidad de la acción de la dirigencia comunal.

PERCEPCIONES SOBRE EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

La siguiente parte del documento se orienta a destacar las principales dimensiones y elementos que componen una lectura del bienestar subjetivo en Colán-Vichayal y el Bajo Chira, esto a partir del análisis de un conjunto de entrevistas orientadas a reconocer cómo se concibe una idea del bienestar a nivel territorial y ejercicios de fotovoz llevados adelante con las y los jóvenes⁹. Las dimensiones destacadas agrupan en gran medida una perspectiva general del bienestar en el Valle del Chira, aunque existen diferencias entre los territorios que serán especificados para ir otorgándole matices a esta lectura del buen vivir a escala territorial.

Centralidad en el acceso a bienes y servicios

Consistentemente con los antecedentes que entrega la información cuantitativa, en ambos territorios se identifican importantes avances en los últimos años en lo que respecta al nivel de calidad de vida de las personas que habitan el territorio, asociado principalmente por la provisión de servicios básicos, vías de comunicación y telecomunicaciones. Hasta hace algunos años, el acceso a agua potable, luz y desagüe no se percibían como servicios generalizados. En la última década, en cambio, se indica que un mayor acceso a estos servicios ha impactado positivamente en el bienestar de las personas.

El acceso a servicios básicos y de comunicación ha mejorado la calidad de las viviendas, así como la conectividad entre Colán-Vichayal y el Bajo Chira con el resto del país. Una de la entrevistadas hace referencia de forma directa a estos cambios cuando señala que, “en el distrito se han desarrollado vías de acceso que permiten mejoras de tránsito entre anexos, como por ejemplo la carretera de Santa Sofía a Cerro Mocho (capital distrital). También se han pavimentado calles y, esto, en periodos de lluvias, permite el acceso para llegar al centro de salud. Aunque en otros anexos más retirados aún no se encuentran esas mejoras” (Lideresa, 36 años. Bajo Chira).

En la figura 1 una mujer argumenta sobre estos cambios respaldando en una fotografía cómo se perciben los cambios en el bienestar a nivel territorial. Los trabajos en infraestructura vial son importantes, indica, porque permiten aportan a la conexión entre poblados y dinamizar económicamente el territorio. En la foto se muestran los trabajos recientes en un camino en el territorio del Bajo Chira que, sin embargo, adolece de un elemento importante para la autora del fotovoz: en su proyección y ejecución no incorporó un espacio o demarcación para la presencia de ciclistas.

⁹ Para levantar información que visibilice narrativas desde abajo, y en base a ello co-construir indicadores territoriales de bienestar subjetivos, Territorios en Diálogo trabaja con diversas fuentes cualitativas generadas en los 7 territorios: 114 entrevistas, 21 talleres y 64 fotovoces. En concreto, para el caso de Piura, se realizaron 24 entrevistas, 5 talleres y 18 ejercicios de fotovoz.



Figura 1.

Desarrollo en infraestructura y conectividad y sus impactos en la calidad de vida.

Autor(a) fotovoz:

Iris Veliz, Bajo Chira,(2020)

Aún existen brechas en el acceso a servicios. Eso no se desconoce en la voz de las y los entrevistados. El agua potable no llega de la misma manera a todos los espacios; existen comunas donde su acceso está restringido a ciertas horas. La conexión a internet es un servicio donde aún falta avanzar. Sobre este último, en la voz de los entrevistados se observa que se puede introducir importantes avances para mejorar la vida cotidiana de los individuos por la importancia que ha ido ganando el servicio en un contexto de pandemia, por ejemplo, para comunicarse con familiares y amigos, que los estudiantes puedan continuar sus estudios a distancia y acceder a nuevos mercados, como menciona un entrevistado ligado a la empresa privada. "El acceso a las telecomunicaciones hoy es central. La posibilidad de que un comunero tenga un teléfono le da una mejora en la calidad de vida porque facilita el desarrollo de diversas actividades económicas y sociales, desde la comunicación con productores como la exportación de mercadería" (Relacionista comunitario empresa privada, 40 años. Colán-Vichayal).

Como menciona el alcalde del distrito de Tamarindo, la importancia de los servicios básicos es central en la construcción del buen vivir y, asociado a una aproximación territorial, implica incorporar también su dimensión comunitaria que muchas veces pasa a segundo plano por la focalización de las políticas escala a individual o pensadas para el confort de las familias. El entrevistado menciona que, "hay que atender también a los servicios básicos que consideran la limpieza pública, el recojo de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines recreación, como también la seguridad ciudadana. En este espacio, las autoridades públicas son las llamadas a implementar y mejorar los servicios básicos de la población" (Alcalde distrito Tamarindo, 36 años. Bajo Chira).

Finalmente, entre los entrevistados la salud mental es un elemento que aparece con fuerza, que vuelve sobre el acceso a servicios públicos y que se menciona como algo que la pandemia terminó de marcar su relevancia. Un médico del territorio lo describe de la siguiente manera: "para entender el bienestar del territorio, la salud mental de las personas es central, que la población esté equilibrada emocionalmente" (Médico jefe Centro de Salud, 55 años, Bajo Chira).

Hablar de salud mental podría considerarse como salud y concentrarse a escala individual, pero

trasciende esta esfera porque refiere también a las relaciones interpersonales, es el sustrato sobre el cual se construye el desarrollo del territorio. Interesa también esta temática entre los entrevistados porque complejiza una discusión que generalmente está centrada en la salud como acceso a centros de atención médica y número de médicos en el territorio, pero no en las especialidades, en las necesidades de la población que van moviéndose en el tiempo. Esta lectura abre espacio para otros factores que también cruzan el acceso a servicios, como el trato que se le entrega a los pacientes que acuden a la asistencia de salud al pedir horas de atención en las consultas médicas.

Hacia una transformación del mercado laboral y el rol de la agricultura

En contraste con el ítem anterior, donde se reconocen progresos que influyen directamente la calidad de vida a nivel territorial, la capacidad de generar empleo al interior del territorio parece ser un escollo no resuelto. En torno a la capacidad de generar oportunidades de empleo, y sobre todo empleo de calidad, hay un pendiente que afecta directamente el presente y la proyección del bienestar a nivel territorial.

Las críticas apuntan a que los trabajos que se generan al interior de los territorios son en su gran mayoría de carácter informal o asociados a contratos de corta duración¹⁰, como señala un entrevistado que trabaja en una radio popular en ambos territorios: “la mayoría de la población que trabaja lo hace en empleos que no son de calidad, no son bien remunerados. La gente trabaja más ocho horas diarias y de manera esporádica” (Radio Brava Ignacio Escudero, 42 años. Bajo Chira). Esta situación afecta la capacidad de los territorios para absorber el interés de los trabajadores y generar ingresos estables, especialmente entre los más jóvenes. Una situación que, en el marco de la pandemia del coronavirus, no ha hecho más que acentuar la precariedad laboral y tensionar la vida cotidiana del territorio por las dificultades para cubrir los gastos regulares de los hogares. Comenta sobre este punto otro entrevistado: “Hay jóvenes que no tienen opciones de desarrollo económico, no hay buenos empleos y terminan siendo subempleados o desempleados. Esto hace que no se generen adecuados ingresos económicos para su familia” (Relacionista comunitario empresa privada, 40 años. Colán-Vichayal).

En este escenario, el territorio de Bajo Chira aporta elementos que es necesario destacar con respecto a las posibilidades de empleo en el mundo agrícola, y posibles proyecciones para el futuro. El diagnóstico general del territorio no es muy distinto a lo antes dicho. En palabras de un joven estudiante y agricultor, se evidencian las limitaciones de la empresa agrícola de mayor escala, que proponía en un principio mejorar las condiciones de trabajo especialmente para los jóvenes, pero no ha logrado doblar las condiciones del empleo local. “Las grandes empresas no están aportando mucho. Al principio el compromiso era que se diera prioridad a los jóvenes del distrito, pero eso no se ha cumplido” (Estudiante y agricultor, 24 años. Bajo Chira). Asimismo, a esta crítica se suman otras voces que critican las presiones que imponen este tipo de empresas en la agricultura de pequeña y mediana escala, que producto de los ingresos económicos que entrega en el corto plazo, hace que esa misma población que emplea deje de ocuparse de sus propios cultivos,

¹⁰ Esto coincide con las cifras nacionales, en las que tres de cada cuatro personas de la población económicamente activa en Perú se emplean de manera informal, según la ENAHO de 2019.

incentivando el alquiler sus tierras.

Ahora bien, este escenario crítico sobre las posibilidades de empleo como asalariados en empresas agrícolas de la zona, se empalma con un diagnóstico que proyecta mayores posibilidades a nivel de una agricultura de menor escala, especialmente desde sectores más jóvenes. Se reconoce en la agricultura familiar o de escala intermedia (distinta a la agroexportadora) una posibilidad para las personas que ven críticamente los empleos que el territorio ofrece o se ven obligados a migrar con expectativas de mejores oportunidades que en el territorio no pueden encontrar.

Se argumenta sobre las posibilidades de este espacio como un soporte frente a las condiciones laborales y las pérdidas de empleos en tiempos de pandemia, y sobre la necesidad de integrar mejoras a la productividad de la pequeña y mediana escala, como aparece en la discusión sobre la figura 2 que desarrolla un ejercicio de fotovoz. Los más jóvenes están conscientes que la manera como se ha trabajado el campo tradicionalmente no es capaz de absorber la mano de obra y las expectativas de los más jóvenes. Sin embargo, se considera un espacio de potencialidades por la fuerza de las tradiciones que posee en el sector y las capacidades de innovar asociadas a los conocimientos que han ido adquiriendo las nuevas generaciones, por ejemplo, en torno a tecnologías de la información, las que pueden crear acceso a nuevos mercados. Sobre estas posibilidades, la misma autora del fotovoz hace una síntesis de la visualización del Estado como un actor central en el acompañamiento y capacitación a los agricultores en este nuevo giro, un acompañamiento técnico que se entiende como limitado.



Figura 2.
Nuevas posibilidades en la agricultura

Autor(a) fotovoz:
Anny Lilibeth BerrI, Bajo Chira (2021).

A través del fortalecimiento de este sector productivo se perfila entonces un mejoramiento del bienestar territorial por las posibilidades de generar una ampliación del mercado laboral que incluya a la población más joven, integre nuevos conocimientos y produzca mejores empleos.

Asimismo, como menciona otro estudiante y agricultor, un fortalecimiento de este sector ayudaría a “mejorar las condiciones de consumo y alimentación a escala local”, un elemento que también se ha visto tensionado por la pandemia y que es visto críticamente en relación a las grandes

empresas agrícolas, en la medida “que los agricultores buscan exportar lo mejor de su producción y dejan para el consumo del pueblo solo el descarte” (Hombre joven, 18 años, Bajo Chira).

Reconstruir los lazos sociales frente al desplome de la institucionalidad

En las entrevistas y trabajos con fotovoz es recurrente apreciar una mirada crítica a las confianzas con la institucionalidad de distinto nivel en la sociedad peruana. La crisis política que atraviesa el país en el último periodo, atravesada por casos de corrupción, una destitución presidencial, cambios sucesivos de ministros y parlamentarios se expresa también a nivel territorial en una desconfianza permanente contra las autoridades regionales y locales, así como también las de orden comunitario.

Desde una mirada a la organización política institucional, se aprecia un discurso permanente entre los entrevistados, que apunta que los “políticos tradicionales se involucran con las comunidades solo cuando viene una campaña política. Lo hacen por un beneficio personal o como retribución de parte del candidato ganador” (Lideresa, 36 años. Bajo Chira). Algo que se replica a escala comunitaria, lo que hace ver los liderazgos locales también con recelo. Como menciona otra entrevistada, “existe una falta de liderazgo y autonomía también en las comunidades campesinas. La falta de liderazgo hace que haya falta de proyectos, falta de oportunidades, genera desventajas en todos los rubros para los pobladores. A la directiva comunal le falta ser autónomos, porque se dejan manipular por las autoridades municipales” (Estudiante mujer, 27 años. Colán-Vichayal).

Este escenario de desconfianza con instancias participativas o de representación afecta el bienestar del territorio. Es una crítica constante que habla de los límites para pensar un escenario futuro construido de manera colectiva, y en general tiene repercusiones en la manera cómo las y los actores sociales piensan su proyección en el futuro. Las personas quieren formar parte de iniciativas, o al menos acompañarlas, pero de forma libre. Se sienten incómodos participando en proyectos donde deben asumir roles, pues lo asumen como una obligación o un paso a formar parte de un espacio altamente desprestigiado.

Para superar este escollo, se observan dos narrativas que congregan expectativas, como una suerte de estrategia para contrarrestar el desencanto y construir cohesión social, porque, como menciona un entrevistado que observa esta crisis de confianza desde la política institucional, “el diálogo, las juntas vecinales, el contacto, la organización, es fundamental para construir bienestar y el desarrollo de los pueblos” (Alcalde Tamarindo, 36 años, Bajo Chira).

La primera es un descuelgue individual, anclado a la esfera privada y centrado en el soporte familiar. La familia se describe como un “verdadero” espacio de confianza, que entrega fuerza, que permite volver a empezar cuando el entorno se muestra adverso o amenazante. Por estas razones, la familia es un espacio de bienestar, privado, pero ampliado en la medida que es un lugar común para todas las personas que conforman el territorio. La valoración de la familia es un rasgo que, además, se ha visto reforzado con el efecto de la pandemia, que obligó a los individuos a asilarse en sus casas y restringir los contactos con otras personas. Como menciona un entrevistado, esta vuelta sobre el valor de la familia puso muchas cosas en evidencia, como “la existencia de una falencia de los espacios recreativos, de los pocos espacios públicos para compartir con la familia, que hoy se están valorando mucho a partir de la pandemia” (Gerente Relaciones Comunitarias

empresa privada, 57 años. Colán-Vichayal).

La segunda narrativa sobre el bienestar que aparece con fuerza, especialmente asociada a las poblaciones más jóvenes, es la importancia del recambio generacional, la entrada de la juventud en los espacios de poder para la construcción de confianzas. La imagen por excelencia de este discurso es lo que se ha denominado como la “generación del bicentenario”, que es la generación joven que lideró las marchas ciudadanas cuando se produjo la vacancia de la presidencia decidida por el congreso el año 2021, el mismo año en que se cumplieron 200 años de la independencia del Perú.

El nombre de esta generación aglutina una gran diversidad de intereses que se manifestaron en protestas sucesivas no solo en Lima, sino que en diversos territorios del país, incluidos Colán-Vichayal y el Bajo Chira. En la figura 3 se muestra una marcha en el Bajo Chira, donde la juventud expresó con fuerza que no estaban por la violencia, sino por los cambios en el país. La autora del fotovoz, al comentar su fotografía, puso en relieve algunas de las características que han ido cruzando a este movimiento. Un movimiento diverso en identidades pero orgulloso de un sentido de la patria, donde las mujeres han jugado un rol importante en su liderazgo, asociada a la clase media peruana, al mundo estudiantil que demanda cambios en la manera como se administra el poder, para que su gestión sea más transparente y que conecte con el principio de igualdad de oportunidades, así como el reconocimiento de las minorías.

Figura 3.
La generación bicentenario se manifiesta.

Autor(a) fotovoz:
Anny Lilibeth BerrI, Bajo Chira (2021).



Así, tanto en la familia como en el espacio que ha ido ganando la juventud en el discurso público se proyectan fuentes donde es posible recuperar la confianza y renovar la cohesión social de la sociedad peruana en general, lo que implica también el de sus territorios.

Finalmente, un elemento que está ligado al tema de los lazos sociales es la manera cómo los individuos se relacionan entre sí en el territorio. Esto, entendido como la necesidad de mejorar el trato en la convivencia ciudadana, en el cotidiano, lo cual responde a una demanda por una mayor igualdad en el lazo social y el reconocimiento de las diferencias en igualdad de condiciones. El trato no aparece de manera directa en el discurso de los entrevistados, es un elemento que cruza sus discursos cuando se refieren a las faltas de respeto que reciben cuando asisten a los servicios de salud, al tomar el transporte público, cuando los reciben en el municipio. Son los desequilibrios

en las relaciones sociales que muestran diferencias de estatus, que rompen un ideal de igualdad que, aunque abstracto, está presente en la idea de un bienestar común para el territorio.



Figura 4.
Relaciones sociales en tensión en la producción de carbón de espino.

Autor(a) fotovoz:
Dervín Nisama, Bajo Chira (2021).

En la figura 4 se representa el tema del trato a través de un registro fotográfico. Su autor comenta que la imagen muestra la parte posterior de unas viviendas en Tamarindo, municipio que forma parte del Bajo Chira. Los espinos que ahí aparecen son utilizados para hacer carbón, en ese mismo espacio, lo que genera una contaminación permanente para todas las casas aledañas. Los vecinos han conversado sobre esta situación y los inconvenientes para la salud de adultos mayores y niños, sin embargo, la producción de carbón de espino no ha parado. Esto ha generado conflictos en la población local, pues la actividad es ilegal, pero sobre todo porque la gente se siente “pasada a llevar”, considera que no es un trato justo entre vecinos y afecta directamente a las buenas relaciones, la convivencia y el bienestar del territorio

El espacio de la juventud en el territorio

El espacio de la juventud en la construcción de una idea de bienestar cruza diferentes esferas. Aparece desde una perspectiva política asociada a la generación bicentenario y las formas en que estos cambios repercuten en el territorio. Ahora bien, por la diversidad de temas que cruzan a la juventud, parece ser necesario tratarla como una dimensión en sí misma, porque vinculada a ella se dibuja un ideal de bienestar subjetivo compuesto por diversos componentes que perfila a los territorios de Colán-Vichayal y el Bajo Chira.

Un primer componente está fuertemente asociado a la educación. La educación como una mediación institucional necesaria para entregarle herramientas intelectuales, prácticas y ciudadanas a la juventud, las cuales ayudarían a imaginar un mejor futuro para el territorio en el largo plazo, pero que también tienen un impacto directo en la generación de ingresos en el mediano plazo. Al hablar de educación a nivel territorial, entonces, aparecen temas vinculados a la importancia de la formación de las nuevas generaciones, la creación de oportunidades y la adecuación de esta formación y oportunidades a la realidad del territorio, que se observa muchas veces disociada de los lineamientos que persigue actualmente el sistema educativo.

En términos concretos, para mejorar el bienestar de la población aparece en diversos discursos la

necesidad de mejorar la calidad de la educación en los territorios, adaptarla a las necesidades locales, porque las condiciones y los temas en que ésta se orienta a nivel local hace que muchos prefieran migrar para tener mejores oportunidades. Un entrevistado lo relata de la siguiente manera: “algunos jóvenes de secundaria no reciben una educación de calidad, no están formados para salir y enfrentarse a la sociedad. Por eso, los jóvenes quieren ir a la ciudad por las mejores condiciones que esta les ofrece. Tenemos un reto, y creo que lo recomendable sería adaptar el sistema, dando cursos cortos que faciliten el acceso a un trabajo, que permita a la gente ir haciéndose un camino que posteriormente les permita acceder a un trabajo” (Hombre desempleado, con historia en cargos de representación, 33 años. Bajo Chira).

Dicho de otra manera, una entrevistada con cargo en el servicio público menciona que para alcanzar una mejor calidad de vida es necesario “el fortalecimiento de las capacidades de la población, mejorar su nivel educativo, porque la capacitación ayuda a ser más productivos. Mejorar el nivel educativo permita acceder a un mejor nivel de vida” (Gerente Municipal, mujer, 43 años. Bajo Chira). Y esta mirada conecta con lo planteado anteriormente, sobre las posibilidades que abre una mayor capacitación para poner en valor sistemas productivos tradicionales, como las explotaciones agrícolas de mejor escala. En el ejercicio de adquisición de nuevos conocimientos se observan posibilidades de abrirse a nuevas tendencias, incorporar tecnologías y generar cambios de mentalidad en la población local. Un ejercicio trascendental para adaptarse a los nuevos tiempos, como menciona un docente y líder comunal de Bajo Chira: “La población debe capacitarse y estar abierta a las nuevas tendencias, pues en el campo estamos muy arraigados a nuestras raíces, por ejemplo, en la agricultura somos muy tradicionalistas y no nos abrimos a las nuevas tecnologías. Por eso la gente se debe capacitar para emprender” (Docente, hombre, líder comunal, 41 años. Bajo Chira).

Otro elemento que se puede asociar a los grupos más jóvenes como elemento de bienestar es la valoración por la cultura y la biodiversidad local, como un patrimonio común. No se trata que solo sea la juventud la que se interesa en estos temas, pero en las entrevistas y trabajo con fotovoces, es el segmento que pone un énfasis distinto, mencionando que en estos elementos hay recursos donde ellos y ellas encuentran bienestar y proyectan un espacio de encuentro y desarrollo con el resto de las personas que conforman el territorio. Es el lugar de encuentro entre adultos y jóvenes, el orgullo piurano como se menciona en diferentes ocasiones para reconocer los bailes tradicionales, la arquitectura local, la belleza del paisaje o la tranquilidad que transmite pasar un día en el campo.

La figura 4 es una representación de lo descrito. A través de esa fotografía, la autora habla de del orgullo y admiración por los molinos de viento, parte de la identidad del territorio, muy asociada al cultivo y producción de la tierra. Los molinos son el reflejo de varios puntos que ella asocia al aprovechamiento del agua, a la capacidad de innovar y mantener prácticas tradicionales que hacen del territorio un espacio rico en cultura, lo que permite generar un balance positivo entre conservación y cambio, tradiciones e innovación.



Figura 5.
Orgullo de las tradiciones locales

Autor(a) fotovoz:
Greace Ramírez, Colán-Vichayal (2021).

Finalmente, son las voces más jóvenes las que subrayan en mayor medida un tema central para pensar un mejor bienestar en el territorio: la igualdad de género. La importancia de cerrar brecha entre géneros se asume como crucial, y descansa en tres grandes argumentos: (i) la necesidad de generar mayor equilibrio en las tareas domésticas; (ii) contener la violencia contra las mujeres; (iii) y establecer una mayor equidad en cargos laborales y de representación.

Sobre el primer punto, una entrevistada entrega diversos elementos para describirlo, señalando que "la distribución equitativa de tareas en el hogar va a permitir generar una nueva generación de personas. Los niños desde el hogar van a ver que tanto papá y mamá se ayudan mutuamente, que y las labores del hogar no son netamente de la mujer. Esto va a hacer que, si llegamos a tener la oportunidad de trabajar, si ambos en la pareja trabajan, ambos se van a ocupar de las tareas del hogar, ambos se ocuparán de las tareas de los hijos" (Lideresa, 36 años. Bajo Chira).

El tema de la violencia aparece en la descripción de la inseguridad a la que se ven enfrentadas las mujeres en los espacios públicos y domésticos, las agresiones físicas y psicológicas que forman parte de un abuso sistemático y que, como contraparte de uno de los aspectos positivos que se enunciaban antes como efecto de la pandemia - las reflexiones en torno a la importancia del espacio familiar como espacio de seguridad -, esta misma versión es reversionada con una percepción del aumento de la violencia en contra de las mujeres en tiempos de pandemia.

Las presiones económicas y sociales, el encierro y el desempleo aparecen como gatillantes de esta situación, que una de las entrevistadas describe de la siguiente manera: "La familia se ha marchitado y la convivencia se ha tornado hostil. La mujer es un cuerpo golpeado, un alma cicatrizada. ¿Acaso puede una mujer soportar tanto dolor? [...] ¡Mujer! No esperes rosas, promesas. Levántate y siembra tu propio jardín [...]. No existe familia perfecta, pero si existe la familia que resuelve sus diferencias con amor, respetando los sentimientos, pensamientos de ambas partes. Los obstáculos que se presentan en la vida se enfrentan y se superan en equipo, esa es la idea de una familia, que tenga una convivencia saludable y libre de violencia" (Mujer joven, 25 años. Bajo Chira).

Y con respecto a la participación de la mujer en espacios laborales y de representación, la figura 6 y 7, un trabajo de fotovoz, es una buena representación de las discusiones que cruzan este tema.

En la primera fotografía se ve a una mujer armando la cerca de un corral con su hija en brazos. Un trabajo que Angy menciona como vital en las labores ganaderas y agrícolas, pero que no tiene ningún reconocimiento. Así, para poder mejorar las condiciones de vida de la población femenina, es necesario transformar la invisibilización de una serie de trabajos que no se toman en consideración, y no solo en el espacio doméstico. Mientras esto no se haga, las mujeres seguirán siendo vistas desde un prisma machista, simplemente como las encargadas de la casa.



Figura 6.
Los roles de la mujer

Autor(a) fotovoz:
Angy Pasache, Bajo Chira (2021).

La figura 7 muestra a una mujer incidiendo en espacios que siempre estuvieron controlados por los hombres. Angy habla de esta foto como la representación de un camino para la igualdad, ya que se están rompiendo un sin números de estereotipos. En la foto hay seis hombres y una sola mujer, pero muestra que ellas también pueden tener poder. La fotografía es la captura de una reunión de trabajo entre gente de la municipalidad y agricultores de la zona, y el hecho que una mujer participe muestra cómo las cosas están cambiando en el territorio, y con ello la calidad de vida de una parte importante de su población.



Figura 7.
Rompiendo estereotipos.

Autor(a) fotovoz:
Angy Pasache, Bajo Chira (2021).

ORIGEN, CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICAS DE TRABAJO DE LAS COALICIONES TERRITORIALES CONFORMADAS EN EL MARCO DE TERRITORIOS EN DIÁLOGO

En consistencia con la distinción de dos territorios al interior del Valle del Chira, en el departamento de Piura, en Perú, TED ha apoyado la conformación de dos coaliciones conformadas sobre la base de las mesas de concertación distrital para la lucha contra la pobreza. La estrategia de CEDEPAS Norte ha consistido en trabajar con estas mesas porque garantizan sostenibilidad en el tiempo, sumando también a los consejos distritales de la juventud, que se encontraban muy debilitados excepto en algunos distritos.

En **Bajo Chira** se encontraban funcionando las mesas de Amotape e Ignacio Escudero, las que en alianza con CEDEPAS Norte constituyen el núcleo base sobre el que se conforma la coalición. En el resto de los municipios CEDEPAS se encuentra liderando la reactivación de las mesas para iniciar el proceso de diálogo. Paralelamente se fortalecieron las organizaciones de mujeres líderes¹¹ y los consejos distritales de la juventud.

En junio de 2021 se iniciaron reuniones ampliadas con representantes de cada mesa distrital, entre los que se encuentran tenientes gobernadores, líderes comunitarios, jueces de paz, autoridades municipales, mujeres, entre otros. Dentro de los principales temas que surgen del diálogo en la coalición de Bajo Chira, está el acceso y calidad de los servicios básicos como eje esencial para el bienestar de las comunidades. Esto constituye una gran preocupación principalmente para las mujeres y ha sido incluida en la agenda de género que han impulsado en el marco de la pandemia y el confinamiento. Si bien, la mayoría de los pueblos tienen cobertura de servicios, la preocupación se concentra en la calidad de los servicios. Otro tema relevante también para las mujeres adultas es la violencia familiar y la necesidad de compartir roles en las familias, junto con la eliminación de todo tipo de violencias hacia la mujer, por ejemplo, violencia económica.

También en **Colán Vichayal** la coalición se organizó a partir de las mesas de concertación para la superación de la pobreza de ambos distritos, a lo que se ha sumado la participación de jóvenes, a través de una organización informal (Karigma), la conformación de consejos distritales de la juventud y organizaciones de mujeres. Se ha incluido también a representantes de la comunidad religiosa, comuneros, agricultores, trabajadores de la salud, entre otros. A pesar de que se contactó a representantes de las empresas de hidrocarburos, autoridades públicas y representantes de las comunidades en conflicto, aún no ha sido posible entablar diálogo con estos actores.

¹¹ Al comienzo del programa no se identifica en las agendas locales temas o demandas específicas en beneficio de las mujeres, que hayan pasado por un proceso de incidencia o de promoción hasta lograr llamar la atención de los demás actores del territorio y de otros niveles. Por eso, a través de una escuela de liderazgo a mujeres del territorio liderada por CEDEPAS Norte se definió una agenda para la incidencia levantada por las propias mujeres de estos territorios. La agenda tiene congruencia con las características territoriales y se centra en la generación de oportunidades económicas y laborales para las mujeres, en la resolución de conflictos con distintas empresas, especialmente por la contaminación del agua, aire y la propiedad de tierras, y en abordar la violencia de género contra las mujeres.

La coalición comenzó a funcionar en junio de 2021. Las conversaciones se han focalizado en el bienestar territorial. Aunque no se ha tratado el conflicto de manera directa, los temas que surgen del diálogo se encuentran relacionados con las consecuencias de los conflictos, tales como los problemas, beneficios y oportunidades de modificar las relaciones existentes entre comunidad y empresa. Otros temas que se han discutido guardan relación con la mala calidad de la educación, la falta de oportunidades económicas, bajos sueldos y la subsecuente migración de jóvenes, que no pueden optar a los empleos que proveen las empresas de hidrocarburos, porque no se encuentran capacitados. También se validaron temas relacionados a la salud, la infraestructura, la falta acceso a servicios públicos y el abandono por parte de las autoridades locales de su comunidad. Finalmente, ha emergido en las discusiones que hay un vacío de liderazgo en las comunidades campesinas para impulsar proyectos que mejoren el bien común.

CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES PARA EL TRABAJO TERRITORIAL

La síntesis de los diferentes elementos expuestos para caracterizar la dinámica territorial del Bajo Chira en Perú, da cuenta de un territorio con notables avances en materia de acceso a infraestructura y servicios, pero que, sin embargo, aun registra carencias importantes que constituyen restricciones para el acceso a oportunidades que se traduzcan en el bienestar de sus habitantes.

Entre estas carencias y restricciones se cuentan las escasas oportunidades laborales, que afectan especialmente a las y los jóvenes; la desconfianza respecto del Estado y el sector privado; la debilidad del tejido social; la existencia de importantes brechas de género y el predominio de una cultura machista que restringe las oportunidades de las mujeres; y los problemas de salud mental y quiebres de ingresos derivados de la pandemia.

Aunque ambos territorios tienen un importante potencial agrícola y ya se observan procesos de reconversión de cultivos en algunos distritos, éste convive con la presencia de industrias de hidrocarburos y agroindustrias que generan fuentes de empleo, pero originan daños medioambientales y generan tensiones al interior de la comunidad vinculadas al uso de la tierra y la participación en los beneficios de estas actividades económicas. Así, las y los pobladores rurales no parecen encontrar resguardo suficiente en la agricultura por cuenta propia para proveerse de ingresos, ni promover proyectos de vida alternativos a la actividad productiva de gran escala, como sí se observa en otros territorios en los que se encuentra trabajando TED en otros países. Esta última observación se confirma al analizar los temas priorizados por los actores sociales reunidos en el trabajo de coaliciones.

En el marco de los procesos de diálogo es posible observar una importante consistencia entre la alta valoración de los servicios públicos en la percepción del bienestar y los temas que van surgiendo como relevantes en las agendas que levantan los actores de la comunidad.

Llama la atención, no obstante, la poca prioridad que tienen los temas de empleo e ingresos en el diálogo territorial, toda vez que, como es de esperar, esta sí es una dimensión relevante en la

construcción del bienestar desde los territorios. Hemos visto que, junto con la posibilidad de acceder a empleos remunerados en la agricultura y otras actividades, se valora también la incorporación a nuevas formas de agricultura familiar, sobre todo de parte de los jóvenes. Mientras que la apelación por empleos formales es fundamentalmente a las grandes empresas, no parece existir una demanda equivalente, ni al Estado ni a los privados, que contribuya a gestionar mejores posibilidades de trabajo por cuenta propia en el agro.

Este es un tema clave de tener en cuenta en el marco de una iniciativa cuya prioridad está puesta, justamente, en la incorporación de las voces y las prioridades de las personas jóvenes en la búsqueda de mejores oportunidades para el desarrollo personal y territorial. El análisis de las percepciones subjetivas sobre el bienestar nos muestra que las y los jóvenes del Valle del Chira valoran mucho la importancia de la cultura, la biodiversidad local y la equidad de género. Al mismo tiempo, demandan de parte del Estado acceso a más y mejor educación para poder capacitarse y acceder al empleo.

Todo ello en el contexto de unos territorios cruzados por una desconfianza generalizada, donde la juventud y el recambio generacional aparecen como espacios de oportunidad para avanzar hacia la construcción de confianzas.

REFERENCIAS

- Ander-Egg, E. (2003) Repensando la Investigación-Acción Participativa. Grupo editorial Lumen Hvmanitas.
- Berdegue, J., & Favareto, A. (2020). Balance de la experiencia latinoamericana de desarrollo territorial rural y propuestas para mejorarla. In J. Berdegue, C. Christian & A. Favareto (Eds.), Quince Años de Desarrollo Territorial Rural en América Latina ¿que nos dice la experiencia? (pp. 11-57). Buenos Aires: Teseo.
- Becker, B. (1982). El uso político del territorio. Consideraciones a partir de una visión del tercer mundo. *Revista Geográfica De América Central*, (17-18), 13-26.
- Berdegué, J. Bebbington, A. y Escobal, J. (2015) Conceptualizing Spatial Diversity in Latin American Rural Development: Structures, Institutions, and Coalitions. *World Development Vol. 73*, pp. 1–10, 2015.
- Berdegué, J. y Proctor, F. (2014) Las ciudades en la transformación rural, Documento de Trabajo 122, Grupo de Trabajo Desarrollo y Cohesión Territorial, Rimisp, diciembre
- Burneo, M. L. (2012). Elementos para volver a pensar lo comunal: nuevas formas de acceso a la tierra y presión sobre el recurso en las comunidades campesinas de Colán y Catacaos. *Anthropologica*, (31), 15-41.
- CEDEPAS Norte. (2020a). Identificación de conflictos en el territorio. Documento interno. Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural
- CEDEPAS Norte. (2020b). Caracterización del territorio "Colán-Vichayal". Documento interno. Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural
- CEDEPAS Norte. (2020c). Caracterización del territorio "Bajo Chira". Documento interno. Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural
- CEDEPAS Norte (2021) Empoderamiento Social para la Incidencia. Informe del curso de empoderamiento dirigido a mujeres lideresas del Bajo Chira
- Fernández, J., Fernández, M.I. y Soloaga, I. (2019). “Enfoque territorial y análisis dinámico de la ruralidad: alcances y límites para el diseño de políticas de desarrollo rural innovadoras en América Latina y el Caribe”. Cepal, Chile.
- Fernández, M.I. y R. Asensio (coords.) (2014), ¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina, Lima, IEP.
- Firchow, P. (2018) Reclaiming Everyday Peace Local Voices in Measurement and Evaluation After War. Cambridge University Press.

García, M. y Spyra, G. (2008) Voces fotográficas: el uso de la imagen en proyectos de comunicación y desarrollo en el sur de Bolivia. En Hallazgos – Producción de Conocimiento No. 9, pp. 61 – 81. Universidad Santo Tomás.

Huamán, A. (2017). Tierras en pugna. Cambios en la tenencia y el valor de la tierra comunal frente a la expansión del agronegocio del etanol en el valle del Chira, Piura. El caso de la comunidad campesina San Lucas de Colán (Tesis para optar el título de Licenciada en Antropología). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales.

Lederach, J. P. (2008) La imaginación moral. El arte y el alma de construir la paz. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Liebenberg, L. (2018) Thinking Critically About Photovoice: Achieving Empowerment and Social Change. International Journal of Qualitative Methods, Volume 17: 1–9. SAGE.

Mac Ginty, R. (2013) Indicators +: A proposal for everyday peace indicators. Evaluation and Program Planning Volume 36, Issue 1, February 2013, Pages 56-63.

Quiñones, P. (2009). Reconfiguraciones comunales frente a presiones empresariales: el caso de la comunidad de Miramar Vichayal. En Á. Díez (Ed.), Tensiones y transformaciones en comunidades campesinas (pp. 163-183). Lima: CISEPA.

Rimisp (2021). Panel Semestral de Gobernanza Territorial y Capital Social. Documento interno. Equipo de Coordinación Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural

Rimisp (2020). Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2019 Juventud Rural y Territorio. Santiago de Chile. Recuperado de: <https://rimisp.org/informelatinoamericano/wp-content/uploads/2020/04/Rimisp-Informe-Latam-2019.pdf>

Rimisp (2016). Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2015 Género y Territorio. Santiago de Chile. Recuperado de: https://rimisp.org/wp-content/files_mf/1479842435InformeLatinoamericano2015.pdf

Tanaka, M. (2014) En busca del eslabón perdido. Coaliciones sociales y procesos políticos, en Fernández y Asensio (eds.) ¿Unidos podemos? Coaliciones territoriales y desarrollo rural en América Latina, Lima, IEP.

Urteaga, P. (2017). Biocombustibles y agua. La transformación del espacio en Piura, Perú. Anthropologica, (38), 7-39. doi: <https://doi.org/10.18800/anthropologica.201701.001>

Villasante, T. (2010) Historias y enfoques de una articulación metodológica participativa. Cuadernos de CIMAS.



www.rimisp.org

.....
Chile · Ecuador · Colombia · Centroamérica · México

